

Continuación de la 8ª sesión de prórroga, del 3 de noviembre de 1894

PRESIDENCIA DEL DOCTOR ALCOBENDAS

SUMARIO: Asuntos entrados - Continúa la discusión en particular del proyecto de ley aprobando los códigos militares para el ejército y armada. (Se aprueba.)

Diputados presentes:

Alcoba, Acaño, Alcobendas, Almada, Alurralde, Alvarado, Alvarez, Amarilla, Amuchástegni, Avalos, Avellaneda, Ayarragaray, Balaguer, Barroetaveña, Berduc, Bermejo, del Campillo, Cantón, Carol, Castellanos (F.), Castellanos (A.), Ceretti, Chavarria, Daract, Frias, Gálvez, García (J. A.), García (L.), García (T.), Garzón, Godoy, Gómez (F. M.), Gómez (I.), Gómez (J. R.), González (G.), González (J. V.), Herrera, Ibáñez, Luque, Lobet, Mantilla, Maurin, Mena, Montier, Obligado, Otaño, Pacheco, Parera, Pérez, Pinto, Rodríguez Jurado, Ruiz, Saavedra Zavaleta, Soaje, Solari, Tamayo, Tejeder, Torres, Ugarte, del Valle, Vila, Villamayor y Villanueva.

Ausentes, con licencia:

Granó, Guñazú, Quesada y Vieyra.

Ausentes, con aviso:

Cabal, Gigena, Irigoyen, Ocampo, Uballes.

Ausentes, sin aviso:

Claros, Cortés Funes, Demarchi, Fernández, Ferrari, Figueroa Alcorta, Martínez, Peña, Pizarro, Varela.

En Buenos Aires, á 3 de noviembre de 1894, reunidos en la sala ordinaria de sesiones de la cámara los señores diputados arriba indicados, el señor presidente declara reabierta la sesión siendo las 3 p. m.

ASUNTOS ENTRADOS PETICIONES PARTICULARES

—Los plantadores de tabaco de la provincia de Jujuy solicitan que no se disminuya el impuesto á los tabacos que se importa. (A la comisión de presupuesto.)

DESPACHO DE LAS COMISIONES

—La comisión de obras públicas se expide en el proyecto de ley, en revisión, acordando permiso á los señores Quesada hermanos para establecer una línea de tramways en esta capital. (A la orden del día).

ORDEN DEL DÍA CÓDIGOS MILITARES

Sr. Presidente—Continúa la discusión de los proyectos de códigos militares.

Sr. Alvarez—Pido la palabra.

Ante todo, señor presidente, yo deseo hacer constar que tengo una grande estimación por el señor diputado por la capital que ha impugnado los proyectos de códigos militares; que soy un admirador de su talento, y que le pido, desde luego, que no vea en lo que voy á decir sino la necesidad de la argumentación, para poder levantar el ataque tan violento, tan vigoroso que él ha traído á esos proyectos.

Desde luego, creo que el primer argumento que hizo el señor diputado, fué que era inconstitucional esta dualidad de que el presidente de la República revise, apruebe ó desapruebe los procesos, en su calidad de comandante en jefe del ejército, ante el artículo 95 de la constitución, que le prohíbe terminantemente rever los procesos militares.

A este respecto, debo recordar al señor diputado que en el hecho, en el hecho exterior, no existen nunca ni pueden existir las cosas como los concibe la fantasía, como existen ó debieran existir segun el espíritu.

Hay una necesidad que es propia de la guerra, en virtud de la cual estas cosas vienen siendo de todo punto necesarias. Es la esencia de la guerra, la esencia de los ejércitos lo que hace necesario muchas de estas incongruencias que el señor diputado ha señalado.

Para mostrar cuál es esa esencia, cuál es esa naturaleza, no voy á valerme de una opinión militar, voy á citar al señor diputado la opinión del profesor Gumpłowicz, de la universidad de Gratz

uno de los mas notables escritores contemporáneos sobre derecho político, que dice así:

«Es, pues, la esencia de toda dominación que no pueda ser ejecutada mas que por una minoría. La dominación de una mayoría sobre una minoría es inconcebible, porque sería un contradictorio. Está en la naturaleza de las cosas que una pirámide repose necesariamente sobre una ancha base, á partir de la cual va siempre estrechándose, hasta el ápice. Sería imposible colocar esa pirámide sobre la punta dejando la base en el aire. Del mismo modo está en la naturaleza de la dominación no existir mas que como ejercicio del poder de una minoría sobre una mayoría.

«En esta modalidad se muestra también el parentesco esencial íntimo de la dominación con la guerra; también ella, según su naturaleza, no puede ser emprendida mas que bajo la dirección de un solo hombre ó de un número muy pequeño de hombres, y las expediciones guerreras, siempre y por todas partes, aún entre las hordas más salvajes, aún entre los animales, obedecen á esa necesidad *imperiosa de la naturaleza* de la guerra; así, pues, no pudiendo ser la dominación más que el resultado de una guerra, la organización de ella se transforma generalmente en organización del poder. Así se explica que la dominación de uno solo, sea cualquiera la forma que tenga, y que la jerarquía de la dominación, se encuentren paralelamente en todas las épocas y en todos los pueblos.»

Existe, aparentemente, en estas dos disposiciones de la constitución que ha señalado el señor diputado, una contradicción; pero no es más que una contradicción aparente.

Entiendo que la primera regla de interpretación, en materia de derecho, consiste en que cuando se va á interpretar un instrumento, debe considerarse que todas las partes de ese instrumento tienen el mismo valor. No puede suponerse nunca que el que ha hecho un documento haya querido destruir con una cláusula lo establecido en otra, y es necesario — aconsejaba mi profesor de derecho en la facultad, el doctor Cortés Fúnes — es necesario que se bus-

que una interpretación que haga posible la coexistencia de las dos disposiciones.

Y la coexistencia existe, en el presente caso. La constitución dispone, en el artículo 93, que el presidente de la República no puede rever los procesos ni atribuirse facultades judiciales; y en el inciso 15 del artículo 86, lo nombra lisa y llanamente comandante en jefe de los ejércitos de mar y tierra de la República, se entiende que con todas las atribuciones que tienen los comandantes en jefe en todas partes del mundo: por la naturaleza de los ejércitos.

Ahora, sin embargo, el señor diputado sostiene que en virtud del artículo 93 de la constitución, el presidente de la República no tiene la facultad que en todas las partes del mundo tienen los comandantes en jefe de un ejército: de aprobar ó desaprobar los castigos aplicados por los consejos de guerra.

Y ¿quién tendrá, entonces, en el país, esta facultad? No la tendrá el ministro de la guerra, porque no se la ha dado la constitución, ni el jefe del estado mayor, ni los jefes de los ejércitos tampoco; todos la tienen, en la actualidad, aquí como en todas partes del mundo, por delegación del jefe supremo.

Un comandante en jefe de un ejército no es más que un delegado del comandante en jefe de todo el ejército para mandar una parte de él, y las facultades que ejerce son todas delegadas por éste. Si el comandante en jefe de todo el ejército tiene facultad para aprobar ó desaprobar procesos, también la puede delegar en el comandante en jefe de ejército. De lo contrario, tendríamos que esa facultad no existe en la República Argentina; y sin embargo, es una facultad absolutamente necesaria en todos los ejércitos.

Yo no creo, por otra parte, que los constituyentes del 53, al instituir al comandante en jefe de los ejércitos de la República Argentina, quisieran instituirlo con la mitad de las atribuciones que le corresponden en virtud del cargo, y si realmente le hubieran quitado la facultad de aprobar ó desaprobar la sentencia de los tribunales militares, es indudable que el comandante en jefe de los

ejércitos de la República Argentina sería un medio comandante en jefe, no un comandante en jefe entero, le faltarían atribuciones que son esenciales para completar su cargo.

No me parece, por consiguiente, que sea viable la interpretación que ha dado el señor diputado por la capital á esa cláusula constitucional.

Voy á pasar ahora á otro punto:

El señor diputado decía, que los tribunales militares son tribunales *ad hoc*, según el artículo 18 de la constitución, que en la frase «ningún habitante» no excluye á nadie.

Ya dije en la sesión de ayer, á propósito de los tribunales *ad hoc*, cuál era la inteligencia que correspondía darle, con arreglo á nuestros antecedentes patrios.

Pero está frase que le llama la atención al señor diputado «ningún habitante será,» etc., es, en efecto, una disposición de orden general, como todas las contenidas en el capítulo de principios, declaraciones y garantías, sujeta á todas las variaciones que la misma constitución establece en otras partes; y cualquiera de estas disposiciones que se tome, tiene, en la constitución, sus derogaciones.

Ella dice, por ejemplo, que nadie podrá ser privado de su propiedad, y, sin embargo, autoriza á que se prive de la propiedad.

Y no solamente pasa ésto con la constitución. Ahí está el código de comercio, que autoriza al capitán de un buque mercante para tomar en alta mar las provisiones que lleva un pasajero, con el objeto de mantener á la tripulación cuando él no tenga provisiones.

Con arreglo á la constitución no podría hacerlo, y, sin embargo, el código de comercio lo ha establecido, y lo ha permitido respondiendo á una necesidad de vida.

Porque, señor presidente, la constitución no ha querido establecer estos principios generales de manera que todas las necesidades humanas hayan de morir para que los principios rijan; no.

Se ha entendido, que cuando es necesario que se modifique un principio de esos por una necesidad de vida, como

es la de los pasajeros de un buque á que me he referido, debe disminuirse la fuerza del principio, que no tiene sino por objeto suprimir las irregularidades ordinarias en la vida normal.

Pero le voy á citar también la opinión que sobre esta manera de interpretar la constitución tiene Whiting, el que fué auditor general de Abraham Lincoln, tantas veces citado en esta cámara como uno de los presidentes más respetuosos de las libertades públicas y de las instituciones de su país. Dice William Whiting: «Mientras existe la guerra, puede y debe suspenderse y hacerse á un lado muchos de los derechos que la constitución considera sagrados—derechos que no pueden ser violados por ley alguna del congreso. Si esto no fuera así, el gobierno mismo podría ser destruído, el ejército y la escuadra podrían ser sacrificados, y una parte de la constitución podría anular lo demás de ella.»

«Si la libertad de la palabra no puede ser suprimida, entonces los espías no pueden ser tomados, aprisionados y colgados.»

«Si la libertad de la prensa no puede ser reprimida, todos nuestros planes militares pueden ser descubiertos al enemigo.»

«Si ningún hombre puede ser *privado de la vida, sin un juicio por jurado*, un soldado no puede matar á su enemigo en la batalla.»

«Si la propiedad del enemigo no puede ser tomada sin un debido procedimiento legal», ¿cómo puede entonces el soldado desarmar á su enemigo y tomar sus armas?»

«Si ninguna persona puede ser arrestada, sentenciada, y fusilada sin el *juicio por jurado*, en el condado ó estado donde se alegue que ha cometido su crimen, ¿cómo se puede fusilar un desertor, ó colgar á un espía, ó tomar prisionero á un enemigo?»

«Se ha dicho que cuando las armas hablan, las leyes callan. Hubiera sido más justo decir que mientras la guerra está empeñada, los derechos que durante la paz son sagrados, deben dar y dan lugar al derecho mas alto—el derecho de la *seguridad pública*—el derecho que el país en masa reclama para ser proteji-

do contra sus enemigos, domésticos ó extraños—contra los espías, los conspiradores y los traidores.

«Los poderes soberanos y casi dictatoriales—vigentes solo en guerra actual; que cesan cuando la guerra acaba—que deben ser usados en la propia defensa y que deben dejarse á un lado cuando la ocasión ha pasado, son, mientras existen, tan *legales*, tan *constitucionales*, y tan *sagrados*, como la administración de justicia por las cortes judiciales en tiempo de paz. Pueden ser peligrosos; porque la guerra en sí es peligrosa; pero el peligro no los hace inconstitucionales.»

Bien, me parece que ese punto quedaría contestado con lo que dije ayer y con la opinión autorizada de Whiting, que acabo de citar.

Paso ahora á examinar este otro punto.

Dijo el señor diputado, que los jurados establecidos por el código militar que estamos discutiendo, no son jurados, porque estos se sortean de todo el pueblo, entrando médicos, abogados, zapateros, albañiles, etc.

Pero, señor presidente, todo el pueblo podría ser jurado si no fuera tan numeroso. La razón de sortearlo de antemano y designar por medio de una lista los que deben ser sorteados, es simplemente por el número de habitantes.

Pero en el caso presente en que se trata de juzgar á los militares y en que los jueces militares deben ser los mismos militares y en que estos forman un número reducido ¿qué inconveniente puede haber en decir que todos ellos pueden ser jurados?

Mas aún: hay conveniencia en facultar á todos para que puedan ser jueces, precisamente por su número exíguo.

Leeré con este motivo—para dejar levantada esta objeción del señor diputado sobre la necesidad de establecer para la justicia militar tribunales separados y reglas especiales—una parte del luminoso informe de la comisión redactora de los códigos militares, que está suscrito por los doctores Obarrio, Alcora, Del Valle, Zeballos, contra almirante Solier y otros distinguidos juriconsultos.

Dice el informe á que me refiero: «Así

las dos clases de reglas que gobiernan las sociedades tienen una intervención directa en el ejército. El militar es ciudadano y es soldado: como ciudadano las reglas del derecho común le exigen su observancia en tanto ellas importan á la moral universal, á los deberes generales; como militar ha recibido una misión especial que una ley igualmente especial reglamenta y dirige, trayendo á los mismos hechos que se comprenden en el derecho común, una gravedad excepcional que le coloca en desigualdad de condiciones al que no siéndolo, tomó igual participación en la perpetración de la infracción criminal.

«Las leyes severas é intransigentes, y que parecen chocar con los principios tolerantes, suaves de nuestro siglo»—por los que tanto abogaba ayer el señor diputado — «no solo son necesarias, sino también justas, porque la criminalidad de las acciones se mide igualmente por los peligros con que amenazan á los poderes públicos y á la sociedad misma, una vez que el acto indiferente en la vida ordinaria puede tener en el ejército consecuencias funestas: la ley protege así á la sociedad, satisface las necesidades del ejército, y se muestra justa y humana hasta en sus rigores como el resultado de la necesidad y de las exigencias de la justicia.

«Conveniente ha sido mantener cierto número de hombres armados en previsión del peligro, ha dicho un publicista argentino; pero como esta fuerza, que así se llama la masa de gente armada, sería un peligro para la sociedad, que permanece desarmada, si pudiese usar contra ella de las armas mortíferas, que maneja, ha sido necesario darle una organización tal, que el peligro sea mayor para el mismo hombre armado si vuelve contra su propio país las armas que en sus manos se pusieron para repeler al enemigo exterior.

«He aquí el origen y la necesidad de las leyes militares, que son la salvaguardia de las leyes civiles, fundadas estas en la justicia, en la *conveniencia*, aquellas. El que tiene en sus manos una arma por conveniencia pública, *tiene que ser despojado de ciertos derechos*, á fin de que la masa llamada ejército obre

como cualquier otra fuerza material con el fin de triunfar ó vencer resistencias.

«Pero si la fuerza pública, si el ejército obedece á una organización especial y á las leyes igualmente especiales, es indispensable que el juzgamiento de las infracciones cometidas á su respecto responda á ese organismo y lleve impreso los caracteres que lo distinguen. Derechos y deberes que salen fuera de la legislación común, necesitan tribunales capaces de comprenderlos, sometiendo á un juicio propio, las trasgresiones que solo en el carácter militar y por razon de su servicio pueden llegar á cometerse.

«Todo se encuentra perfectamente vinculado en los organismos de esta naturaleza. Si hay ejército, es necesario una organización determinada, y si hay esta última dentro del estado y fuera de la legislación común, la existencia de los tribunales militares en su consecuencia. Y esta jurisdicción excepcional se funda, en primer lugar, sobre una alta y poderosa consideración política, una razon de estado ó la necesidad de asegurar la misión de obediencia y de sacrificios á que los ejércitos se dedican; y en segundo lugar, sobre un principio substancial, porque no es sino ante los tribunales militares que las infracciones de disciplina pueden obtener buena y segura justicia.

«Si los delitos contra el servicio militar fueran juzgados por otros que por militares, decia Broglie en su informe á la cámara de los pares de 4 de mayo de 1829, frecuentemente quedarían sin castigo. Cuando existe, al primer aspecto, una gran desproporción entre el grado de severidad moral que un acto supone, y el grado de severidad en la pena que le es aplicada, la impunidad es casi seguramente su consecuencia.

«¿Cuáles son las causas que, de cuatro sobre cinco, conducen á los militares á la justicia? Aquellas mismas que raramente dejarían, aunque por error, de interesar en su favor á un tribunal ordinario: un momento de olvido ó de debilidad, algunas palabras escapadas en la efervescencia de un primer movimiento, el resentimiento de una injuria bruscamente manifestada, el pesar del aban-

dono de la vida civil y del hogar paterno.

«Las consecuencias de la insubordinación en el ejército son, sin duda, temibles, y en él nadie las ignora.

«La educación de los campamentos instruye al soldado dándole una noción viva y profunda de sus deberes militares y colocando en el fondo de su corazon un sentimiento de honor pronto y delicado que le advierte en presencia de un delito contra su servicio, casi tan segura y severamente como lo haría su conciencia en presencia del robo, del asesinato.

«Llevado el militar culpable ante los tribunales ordinarios, aparecería menor culpable de lo que lo es en realidad; sería juzgado por hombres para quienes la importancia de la disciplina es una idea teórica, una concepción del espíritu mas bien que un sentimiento vivo y en acción; sería juzgado por hombres que apreciarían su conducta según la regla de la vida ordinaria y sin consideración á la idea que él mismo se había hecho; y encontraría una indulgencia que no merece y que no se halla en el fondo de su propio corazon.»

Estas son, pues, las razones, notablemente expuestas por la comisión redactora del código militar, razones que exigen que la justicia militar sea administrada por militares.

El proyecto presentado á la consideración de la cámara establece que todos los militares pueden ser jurados, sin más condición que encontrarse presentes en el lugar donde se cometió el hecho que motiva la causa. No ha querido la comisión que se forme una lista previa porque era innecesario.

Además de esta inconveniencia, de que los militares sean juzgados por civiles, habría esta otra: de que el superior fuese juzgado por su inferior. En todos los ejércitos organizados se han tomado providencias para evitar que esto suceda; porque es lógico suponer que los hombres se sientan inclinados naturalmente á encontrar más culpable de lo que puede serlo á aquel individuo que les dejaría una vacante. Había entonces, necesidad de establecer, y la comisión lo ha establecido, que nunca, en un con-

sejo de guerra podrá haber más de la mitad de vocales con igual ó inferior graduación á la del acusado. Y todas estas circunstancias vienen á limitar el número de personas que pueden ser jurados en cada caso ocurente.

Pero el señor diputado dice: las listas de oficiales hábiles son formadas *ex post facto*; son listas formadas después de ejecutado el delito.

Pero, señor presidente, no hay que pagarse de palabras! La lista de oficiales hábiles con arreglo á la ordenanza vigente, de acuerdo con los actuales procedimientos del ejército, consiste en una nómina de todas las personas que existen en el fuerte, campamento ó ciudad y que son aptos para desempeñar el cargo.

En la actualidad, para el cargo de defensor, por ejemplo, se pasa al consejo la lista de oficiales hábiles para serlo, y se entrega al reo para que elija su defensor. Esta lista está compuesta de los oficiales que existen en la guarnición y que pueden ser defensores, desde general á subteniente.

Este es un procedimiento perfectamente conocido entre nosotros. De manera que el señor diputado no se ha fijado en que el individuo que será jurado lo es *ante factum*. La ley establece que para el caso de juzgar á un capitán deberán ser sus jueces todos los individuos de superior gerarquía á la suya, y dispone también que en presencia del defensor del acusado, del fiscal y del presidente del consejo, teniendo á la vista la lista de oficiales hábiles, se sorteen de entre ellos los vocales del consejo.

Otra disposición del código establece que la exclusión del sorteo de algun individuo hábil para ser vocal, es una causa de nulidad de la sentencia. De manera, pues, que está perfectamente garantido en la ley, porque aunque se pida la lista al jefe del estado mayor por ser el único que sabe cuáles son los oficiales y jefes que existen en la localidad, él no puede excluir á ninguno. No se excluye en la actualidad, ni se ha excluido nunca y tampoco sucederá eso en adelante, porque el defensor puede

entonces alegar de nulidad del juicio, por esa exclusión.

Pero, señor presidente, tampoco podíamos nosotros formar de antemano la lista de los que pueden ser jurados, es decir, formarla *ante factum*, como quiere el señor diputado, porque el ejército, como dice la comisión revisora, debe ser un organismo que pordonde quiera que vaya lleve consigo todos los elementos necesarios para su vida. Y entonces, para poder formar de antemano la lista de los oficiales hábiles para jurados en cada delito, sería necesario saber en qué lugar se va á cometer ese delito.

Pero como la ley establece que donde se comete el delito, todos los oficiales que existen en ese lugar son personas hábiles para formar el jurado, entonces, si bien no está hecha de antemano la lista de los jurados, están designados de antemano por las circunstancias, por la ley; ellos existen con la misma seguridad con que existen los jurados habituales designados por la suerte en los países donde está establecido el jurado.

Me parece entonces que este punto, que fué objetado por el señor diputado, lo he contestado en tiempo, á mi modo, de ver.

Si el señor diputado encuentra que la contestación es defectuosa, no tendré inconveniente en darle mayores explicaciones.

El señor diputado nos decía, que su propósito era asegurar el interés de los acusados y la justicia. El quiere tomar providencias para asegurar la vida y el honor de los militares por encima de todo. Pero, señor presidente, el ejército no ha sido creado en beneficio de los militares—lo dice perfectamente este informe de la comisión redactora:—el ejército ha sido creado en virtud de una necesidad nacional para garantizar el interés, el honor y la vida de la sociedad. Esto es, por consiguiente, lo primero que hay que asegurar en un ejército.

En el notable informe del que acabo de leer unos párrafos, se expresa perfectamente esto: hay necesidad de despojar al soldado de ciertos derechos, de ciertas garantías, para poder confiarle

un arma para la seguridad de la sociedad.

De consiguiente, lo primero de que nosotros tenemos que preocuparnos al legislar para el ejército, es de dictar leyes que garanticen la vida, el honor y la seguridad de la nación.

Entonces, debemos tratar de que ese ejército reúna todos los requisitos necesarios para concurrir á esos fines, y los únicos requisitos que en todas partes del mundo se consideran indispensables, son los que este código establece: es decir, aquellos que concurren á hacer del soldado, por medio de la disciplina, un esclavo de la ley, no un ciudadano con derechos, con opiniones, con pareceres, que usa las armas para defender su derecho personal y que se vale de la fuerza que le ha confiado la sociedad para que la defienda á ella, para defender sus intereses como él los entiende.

De manera, pues, que es necesario que el señor diputado se habitúe á este desnudamiento de derechos que hacemos para los militares, porque es una necesidad del oficio, una necesidad de la sociedad.

El señor diputado, en su exposición de ayer, presentó un ideal del ejército, ó, á lo menos, este ideal del ejército: que el comandante en jefe no pueda rever, ni aprobar, ni desaprobar los castigos militares; le repugna que el jurado sea obra del presidente; quiere tribunales permanentes, inamovibles, es decir, que el señor diputado quiere para los soldados de Federico II la justicia del molinero de Sans-Souci; el señor diputado quiere que un alférez recluta, pero patriota y altivo, pueda decirle al presidente de la República: Hay jueces en Berlín!

Bien, señor presidente: esto no puede ser; es imposible un jefe que mande y que no tenga la facultad y los medios de hacer cumplir su mandato, pues que la desobediencia á su mandato no va á estar en su mano el reprimirla, sino en manos de jueces inamovibles, con todas las garantías y con todas las seguridades que quiere el señor diputado, con absoluta independencia, porque le choca que los jueces militares sean subalternos del

comandante en jefe del ejército, á pesar de que tengan que ser militares.

Pero, señor presidente: si admitimos este ejército con subalternos encargados de juzgar ellos mismos su desobediencia, ya no serán subalternos en este caso.

Si se pudiera realizar la idea del señor diputado, que me parece vá á ser contraproducente,—yo le preguntaría: ¿de qué laya van á ser los jueces inamovibles que él desea para el ejército?

Tendrá que nombrarlos el presidente de la República. Pero, señor presidente, toda la historia argentina está demostrando que cuando se quiere conseguir mayores ventajas y mayores seguridades que las que dá el estado del país, todas las medidas que se toman en ese sentido son siempre contraproducentes.

Si el señor diputado constituye tribunales permanentes, inamovibles, y el presidente de la República tiene que nombrar á los miembros de esos tribunales, yo le pregunto al señor diputado: ¿á quién nombra?

Yo tengo quince años de vida en el ejército, y puedo asegurar al señor diputado, por mi experiencia personal, que este procedimiento de que nosotros los militares seamos jurados para juzgar á nuestros compañeros, es infinitamente mas eficaz que esos jueces firmes, permanentes, nombrados por el presidente de la República ó por el comandante del ejército.

Ya demostré ayer la imposibilidad de que existan estos tribunales permanentes en todas partes en donde un ejército viaja, de que pueda hacerse de antemano en una parte donde no hay soldados y á la cual se manda soldados, después.

Pero estos miembros de los tribunales permanentes, esos jueces militares inamovibles, ¿los vá á poder ascender el presidente de la República?

Entonces, resulta que si estos jueces inamovibles se pusieran en contra del presidente de la República, y fallaran adrede contra él, no les daría ascensos.

Pero esto no sería lo malo; lo malo, lo irregular, lo absurdo para el ejército, sería que un tribunal, compuesto por subtenientes, por capitanes ó por mayores, pudieran ponerle las peras á cuarto

al comandante en jefe de todos los ejércitos de la República.

El señor diputado decía ayer que estos códigos eran monstruosos, por los ataques que llevaban á la constitución. Me disculpará, por consiguiente, el señor diputado; yo no encuentro otra palabra que ponerle que ésta.

Yo le preguntaría al señor diputado: si naciones rivales nuestras, enemigas de nosotros, quisieran establecer para nuestro ejército una organización tal que les asegurara á ellas la victoria, que produjera la anarquía y sembrara la discordia, que llevara la indisciplina al ejército ¿qué cosas nos darían mejor que esta especie de derecho de insurrección?

Yo le recuerdo al señor diputado que estas cosas son de todo punto contraproducentes, y que este modo de proceder así se ha usado en otras ocasiones.

El señor diputado ha de saberlo: la Polonia, la desgraciada Polonia, tenía una constitución que se llamaba la constitución del *liberum veto*.

Esta constitución consistía en que ninguna resolución podía ser adoptada por la Dieta de Polonia si no por la unanimidad de sus miembros; que un solo miembro que se opusiera era bastante para impedir toda ley.

Y sucedió que esa constitución sirvió para matar á la Polonia; que las naciones vecinas se apercibieron en seguida de que esa constitución iba á traer la destrucción de la Polonia; y el día en que los polacos, apércibidos de las desgracias en que se encontraban, pretendieron cambiarla, Catalina II mandó un ejército á la Polonia, á exigir que no se cambiara la constitución, que se mantuviera la constitución del *liberum veto*; y, pocos años después, esa misma constitución entregó la Polonia en manos de la Prusia, del Austria y de la Rusia.

Estos son los efectos de medidas de esta naturaleza, de medidas que, en vez de asegurar la fuerza de un estado, la fuerza del ejército, tienden á lo contrario: á establecer dentro de un estado la anarquía, dentro de un ejército la falta de subordinación, la falta de cohesión.

Yo esperaba que, cuando el señor di-

putado formulaba afirmaciones tan severas contra estos proyectos de código, cuando el señor diputado llegaba hasta decir que eran monstruosas violaciones de la constitución; esperaba, digo, que citara autoridades.

Y, efectivamente, el señor diputado nos citó el alegato presentado por el doctor José María Moreno, por el doctor Manuel Quintana y por el doctor Juan Carlos Gómez, cuando la revolución del 74. Además de eso, el discurso del señor diputado era, en el fondo, un resumen, del notabilísimo discurso que produjo el doctor Aristóbulo del Valle, en la causa del coronel Espina, ante la suprema corte.

Yo no tengo inconveniente en declararlo: si yo hubiera estado en el caso del doctor José María Moreno, habría presentado el informe que él presentó, á haberlo podido presentar; si yo hubiera estado en el caso del doctor Aristóbulo del Valle, y hubiera tenido el talento que él tiene, yo habría hecho la defensa que él hizo, del coronel Espina.

Es necesario saber que las defensas que se hacen ante el foro, no son nunca la expresión sincera y exacta de lo que un individuo piensa, sino la expresión de la necesidad en que el individuo se encuentra de defender.

Todo defensor tiene por principal deber, por primordial objeto, salvar á su defendido, aunque la tierra se hunda.

De consiguiente, todos los alegatos que se hacen en defensa de los acusados, no tienen nunca mas que valor en la causa donde se producen; fuera de la causa no tienen valor, ni mucho menos podría admitirlos un cuerpo como éste, un congreso, para fundar sobre ellos una resolución.

Acórdemonos, señor presidente, de Cicerón, el mas grande de los oradores forenses que han existido.

A Cicerón se le reprochaba el venir, un día, á sostener en un caso lo contrario de lo que había sostenido en otro. Y él dijo: Lo que yo digo en un caso, es lo que conviene á mi defendido, no es la opinión que yo tengo.

Y, efectivamente, señor, este es el caso: un hombre está obligado á hacer los mayores sacrificios; está obligado á te-

ner, como dice Boissier, hasta un poco de enceguecimiento para no ver sino lo que le conviene á su defendido.

Estos alegatos, pues, no tienen valor científico, diré así.

El señor diputado mismo decía ayer: Los miembros redactores del primitivo proyecto de código, algunos de ellos, han sido miembros de la comisión revisora, y han cambiado de opinión, pero yo no les admito que cambien de opinión.

Y yo le digo al señor diputado: el doctor del Valle que hizo el majistral discurso en la causa del coronel Espina sosteniendo que los delitos de rebelión y sedición no eran delitos militares, formó parte de la primera comisión redactora de los códigos militares; y en la sentencia de la corte pudieron sus miembros valerse precisamente de los fundamentos de esos mismos códigos redactados por él, para no hacer lugar á su petición.

Dice, por ejemplo, la sentencia de la corte, en la relación del asunto: «El estudio de las cuestiones que este último delito pueda suscitar, al buscar los consejos de la doctrina técnica que pueda ilustrarla, ninguna podía ofrecerse más completa, más oportuna y más autorizada, que la del mencionado proyecto de código penal militar».

«Redactado por una comisión compuesta de distinguidos jurisconsultos y de jefes de alta graduación, su competencia y su trabajo lo recomiendan señaladamente, acrecentándose con la autoridad del poder ejecutivo, poder colegislador, que lo aceptó y lo pasó con recomendación expresa al honorable congreso nacional.

«En la confección de ese proyecto, sus autores han consultado todos los códigos modernos de las naciones civilizadas é ilustrados tratadistas extranjeros.»

«El delito de rebelión militar se encuentra definido y penado en él, atribuyendo, como era consiguiente, su juzgamiento á los tribunales militares, aún en los casos en que fuere cometido en conexión con un delito político, si bien en éste caso dispone la exclusión de la pena capital, en acatamiento de la inmunidad constitucional que lo defiende»

De manera, pues, que yo creo que la cámara no podría inspirarse en los alegatos citados por él señor diputado, para dotar de códigos al ejército.

El señor diputado sostenía que los delitos políticos cometidos por militares corresponden á la justicia civil, porque sería una monstruosidad, dijo, someter, por el mismo delito, los unos á la severidad militar y amparar á los otros con la benignidad civil.

Me parece que él citaba las palabras de no se qué orador que había señalado esto—Beryrer, si mal no recuerdo—que decía: «Los unos son absueltos; los otros ván al patíbulo.»

Este argumento tiene mucha fuerza, pero solo aparentemente.

Yo le pregunto al señor diputado, si no está fundada toda la legislación militar en esta misma circunstancia de castigar al militar mas severamente que al civil por la misma clase de delitos, y de castigar al militar por hechos que no son delitos en el civil.

¿No es una monstruosidad todo esto? ¿Qué de extraño es, por consiguiente, que en un delito de rebelión ó sedición cometido por militares y civiles se les aplique diferente pena á unos y á otros?

Hay más, señor presidente: todos los delitos militares, casi todos los delitos esencialmente militares por lo menos, pueden ser cometidos en colaboración con una persona civil.

¿Cuál es el delito mas grave, en el ejército? ¿Es la insubordinación á mano armada contra el superior?

Supongamos que soy subteniente y busco á un amigo mio, á un pariente cualquiera, y con él voy y le pego una paliza á mi coronel. Es un delito que he cometido con la complicidad de un particular.

Ahora, con arreglo á este código y á todos los códigos de la tierra, mi cómplice iría á la justicia civil y yo á la justicia militar. La justicia militar mandaría me pegaran cuatro tiros:—es la pena señalada; la justicia civil castigaría á mi cómplice por lesiones corporales.

¿Quiere que igualemos las jurisdicciones, que no establezcamos esta monstruosidad?

No tenemos más que dos medios, señor presidente: ó llevar al civil ante la justicia militar para que le peguen cuatro tiros, ó llevar al militar—al subteniente que ha maltratado de obra á su coronel—á la justicia ordinaria para que le castigue por lesiones corporales.

Indudablemente, señor presidente, será monstruosa esta desigualdad, pero es una desigualdad que existe en la naturaleza de las cosas y que no la podemos hacer desaparecer. Más monstruoso sería que nosotros, como nación, viviéramos sin ejército; porque destruir esa monstruosidad es destruir el ejército.

Decía el señor diputado, que la cámara no debe sancionar á libro cerrado estos códigos militares, como ha sancionado los códigos comunes; porque los códigos comunes se pueden sancionar á libro cerrado, en virtud de que son menos graves que estos.

Yo no lo entiendo así, señor presidente, y, por el contrario, me parece que las cámaras de cualquier congreso tendrían siempre mayor competencia para sancionar en detalle y artículo por artículo y para introducir modificaciones respecto de un código común, ordinario que lo conocen todos más ó menos, y con las cuales, también, están todos más ó menos familiarizados, que no con un código militar, con un código técnico, en el cual, por el simple deseo de establecer una mejor justicia, de defender á un acusado, los abogados y médicos que se sientan en este congreso correrían el peligro de pervertir la disciplina del ejército.

Y entonces yo le contestaría que si hay algún caso en que un código debe ser sancionado á libro cerrado, es aquel en que un congreso no se encuentra habilitado, por conocimientos especiales, para tratarlo, y en que son necesarios esos conocimientos. Me refiero al código sanitario que discutió la cámara y que se sancionó á libro cerrado, porque cómo íbamos á discutir nosotros drogas, como dijo muy bien un señor diputado?

Ahora no podemos decir que estemos mejor preparados para discutir códigos militares que para discutir drogas y asuntos de medicina, apesar de tener con esta última alguna familiarización.

Si yo tuviera que designar algún caso en el cual la circunstancia de no ser militar conduzca á una persona á producir un aborto de código que suprima la disciplina y haga imposible el ejército, citaría el caso del señor diputado.

En caso de prevalecer las ideas que el señor diputado ha expuesto en la sesión de ayer, es indudable, señor presidente, que nosotros tendríamos una especie de ejército democrático, un ejército que no ha existido en ninguna parte del mundo, que no ha podido existir.

Pero lo curioso de todo esto, señor presidente, es el horror que manifestaba el señor diputado por los fueros militares y por las leyes *ex post facto*. Porque el señor diputado se proponía—dada la manera tan fuerte como los ha combatido—conseguir las dos cosas. Se proponía conseguir fueros militares y leyes *ex post facto*; y el *busilis* de esto está en un proyecto que él presentó á esta honorable cámara, y que es como sigue:

«Artículo 1º Declárase que la jurisdicción de los tribunales federales se extiende al conocimiento de las causas de los militares de línea comprometidos en rebeliones ó sediciones contra las autoridades de la nación, y que estos delitos están regidos por las leyes de la justicia nacional.

«Art 2º Los jefes y oficiales que en la actualidad se hallen condenados por consejos de guerra, á causa de haber tomado participación en los sucesos revolucionarios de 1893, serán sometidos á la justicia federal.»

Véase como el señor diputado va buscando una ley *ex post facto*, para que se aplique al hecho, despues de producido. Es decir, el proyecto de ley que presentó era una ley *ex post facto*.

Porque estas leyes penales tienen esta particularidad: que cuando son más favorables al acusado pueden ser retroactivas. Más aún: son retroactivas de derecho.

De manera que si el código militar fuera sancionado con la incorporación de estos dos artículos, se aplicaría retroactivamente, *ex post facto*, á todas las personas que están mencionadas en el artículo 2º de este proyecto de ley.

El señor diputado va buscando precisamente al combatir los fueros, establecer fueros; es decir, una especie de fuero civil privilegiado, con efecto retroactivo, para los militares politiqueros; para los jefes de batallón que aspiren á salvar al país, á quienes coloca en la holgada posición del murciélago de la fábula, que cuando estaba entre los cuadrúpedos se declaraba pájaro y cuando estaba entre los pájaros se declaraba cuadrúpedo.

Quiere establecer un fuero revolucionario para los militares, á fin de que, cuando les convenga, puedan declararse ciudadanos sin perder el grado militar y sin pedir la baja.

Yo declaro con toda sinceridad, que al hacer referencia á este particular, es porque deseo ardientemente, como el señor diputado, que eso suceda; pero quiero que se obtenga por otro medio: una simple ley de amnistía bastaría para conseguir esto y mucho más; ley de amnistía que yo ansío y que espero que no ha de tardar en presentarse.

Pero no me parece justo que para conseguir aquello que se puede obtener por una ley de amnistía, desfiguremos estos códigos militares que deben ser permanentes y no amoldados á las exigencias del momento, teniendo en vista los altos intereses de la nación argentina, su conservación y su defensa contra todo enemigo exterior.

No se olvide de eso el señor diputado; por que ese es el principal objeto del ejército. Todo lo demás es perfectamente secundario.

El señor diputado dijo, en la exposición del proyecto que acabo de leer, según la versión taquigráfica que tengo á la vista, que su propósito era mejorar al soldado, que su propósito era beneficiar al ejército.

De manera que nosotros hemos venido indirectamente á aparecer como interesados en perjudicar al ejército, con esta disciplina severa y estricta de que tanto se lamentaba el señor diputado.

El señor diputado quiere beneficiar al ejército estendiendo hasta él la jurisdicción benigna de los tribunales civiles.

Pero, señor presidente, esta es otra

cuestión completamente contraproducente.

Del punto de vista de las conveniencias del ejército, yo, con catorce ó quince años de vida militar—no tengo dificultad en declararlo—me he convencido de que no hay desgracia más grande en un ejército que estar imbuido de este espíritu de revolución, de discusión, de desacuerdo en todo. No hay cosa peor en un ejército, no hay nada más pernicioso, mas perjudicial y mas peligroso para los mismos miembros del ejército, que tener ese espíritu de desobediencia, de mala voluntad, de desacatamiento, de discusión para todas las órdenes dadas por la superioridad. Y á la vez, no hay nada mas provechoso á la disciplina, á la unión y tranquilidad del ejército, que la conformidad de todos en el cumplimiento de su deber.

Si fuera yo á averiguar quiénes son los que más discuten en todos los ejércitos del mundo, quiénes son los que más se rebelan contra sus deberes, quiénes discuten más la legalidad de las órdenes que se les da, comprobaría que no son los oficiales más dignos, más laboriosos y escrupulosos en el cumplimiento de su austera misión.

En todos los gremios hay ciertos hombres que aceptan su deber de buen grado y lo saben cumplir con buena voluntad; pero hay también por desgracia, otros que, por el contrario, no lo cumplen de buen grado, á quienes todo les parece mal y encuentran todo criticable.

Repito: la peor desgracia de todo ejército es tener estos elementos anárquicos en su seno. Lo digo por experiencia.

¿Qué prueba puedo ofrecer de que es esta la peor desgracia? Toda la América del Sud lo está demostrando: casi todos los países que la forman presentan ejemplos elocuentes de que es funesto tener ejército politiquero, ejército que se meta á hacer la «salvación del país», ejército sin disciplina, ejército con jefes de batallón que se crean autorizados para todo, como Latorre en la Banda Oriental, como tantos otros en la América Central.

No hay cosa mas averiguada, señor presidente, que ésta: que estos ejércitos ciudadanos, que estos ejércitos cívicos significan un gran peligro siempre para las sociedades y para ellos mismos.

Yo no quisiera decir esto solo con mi autoridad; voy á apoyarlo con la autoridad de Macaulay, el célebre autor, idólatra de la libertad, el escritor ponderado, juicioso y respetuoso de todos los derechos. Véase lo que dice Macaulay respecto á esto de llevar á la guerra el espíritu de la paz, á los ejércitos las costumbres, los derechos, la benignidad y la amplitud de las sociedades civiles.

«No existe una verdad á la cual la experiencia de los pueblos haya impreso sello mas marcado de certidumbre, que aquella que declara política débil y cruel la que imprime á la guerra el espíritu de la paz. Las negociaciones requieren deliberación y aplazamientos; pero cuando un caso extremo exige la adopción de la guerra, remedio violento y que lo es solo por ser así, es insensato pensar en calmantes y diluciones; que las guerras conducidas con tibieza y miramientos no pueden lograr mas resultados prácticos que las negociaciones ó la sumisión, y proceder con arreglo á otros principios que los de la mayor energia en casos tales, no es gastar sangre y dinero, sino malgastar ambas cosas.»

Esto es, señor presidente, perfectamente aplicable á la disciplina del ejército. Una disciplina del ejército con calmantes, con diluciones, con benignidades, no sirve nada más que para perjudicar al ejército, para destruir su textura.

Estos jueces inamovibles que van á fallar como los jueces ordinarios del derecho comun, tribunales de «tiro pesado», diremos así, con que se vá á administrar la justicia militar, todo eso es introducir en el ejército el espíritu de las sociedades civiles; es quitarle su carácter marcial, es quitarle su energia y rapidez, todos los resortes, en fin, que lo hacen una potencia.

En todos los países de la América se ha visto esto: lo más necesario, lo más

económico en caso de guerra, es tener un ejército fuerte, bien organizado, bien disciplinado

Los autores contemporáneos reprochan á los Estados Unidos del Norte haber movilizadado en su guerra de secesión millones de «voluntarios», de guardias nacionales que seguan siendo ciudadanos, y les han reprochado, nada mas, que porque no tenian soldados hechos. Tuvieron que improvisarlos, y de la improvisación recogieron los mas deplorables resultados.

Pero nosotros estamos viendo lo que sucede en estos países que nos rodean, que no tienen ejército con disciplina militar, ejército con nervio y espíritu militar. Son ejércitos con espíritus cívicos, con disciplina mantenida por procedimientos de guardia nacional. Yo no quiero mencionarlos; pero está á la vista de todos lo que pasa en ellos.

Y si el señor diputado quiere introducir en los códigos que tratamos de sancionar estos procedimientos para afirmar mas en esta forma el derecho de la revolución de los pueblos oprimidos contra los gobiernos opresores, yo le digo que este mismo propósito no justifica la adopción de tales medidas. ¿Por qué? Porque este derecho de la revolución, como lo sostuve ayer, no se presta á reglamentación. El que lo ha expresado mejor es Jorge Washington, quien ha dicho: «es un derecho que existe en todos los pueblos, que es inherente á su libertad, y que no necesita estar escrito ni reconocido en ninguna carta.»

Y tampoco necesita estar garantido en ninguna ley, señor presidente.

Creo que si alguna experiencia tenemos bastante adelantada en nuestro país, es la experiencia de las revoluciones: las conocemos demasiado.

Una revolución que se hace en beneficio de la nación, en obsequio del bien público, reclamada por el mismo país, no necesita para triunfar del amparo de ninguna disposición legal. El congreso mismo ha votado pensiones para las viudas de muchos militares que han muerto en esas revoluciones, y no precisamente en las filas del gobierno.

Una revolución en esas condiciones es una revolución que triunfa, aunque

transitoriamente sea vencida. ¿Y qué más se puede pedir?

Establecer un derecho especial con ese fin en los códigos militares, sería simplemente conceder el ejército para las revoluciones de partido, para las revoluciones que no son verdaderamente nacionales; sería reconocer el privilegio revolucionario á favor de jefes y oficiales que á la vez que miembros del ejército son hombres de partido y aprovechan su favorecida situación para hacerla servir á intereses ajenos á su misión, contando con la benignidad de los tribunales comunes.

Entonces, ya no habría que confiar en la voluntad del país, que al fin es la que debe imponerse, sino en la influencia del pretorianismo.

Después de todo lo que he dicho, y que creo suficiente porque no es mi ánimo fatigar por mucho tiempo la atención de la honorable cámara, creo que quedan disipados los temores y las alarmas que el señor diputado haya podido despertar con su afirmación tan dura, de que estos códigos son una verdadera monstruosidad. La honorable cámara, que ya ha resuelto, por el artículo 1º, aprobar este código, debe seguir sancionándolo en la forma en que viene.

La moción de aplazamiento que hace el señor diputado, me parece que sería mas bien en beneficio de esas mismas facultades excesivas del poder ejecutivo que él quiere limitar en lo posible; no sería en obsequio de los militares, porque este código que proyectamos, con todos los defectos que pueda contener, es mucho más adelantado que las ordenanzas de Carlos III, que en la actualidad puede aplicar el poder ejecutivo al ejército de la República.

Yo debo declarar, señor presidente, porque he recibido insinuaciones de miembros distinguidos del ejército, con quienes he podido estar en comunicación, que todos desean que se sancione este código, aunque no sea más benigno que las actuales ordenanzas, siquiera para salir de ese *mure magnun* de disposiciones y órdenes generales, que es muy difícil tener presente á los militares porque no es posible saber

cuáles han sido derogadas y cuáles están en vigencia.

En resumen, lo que impera en el ejército es el arbitrario mas completo en materia de procedimientos, en materia de penalidad y de leyes de fondo. Rijen todavía aquellas leyes que mandaban cortar la lengua á los blasfemos!

Señor presidente: este código militar no es perfecto, porque la perfección no es sino una palabra que tiene distinto significado para cada persona.

Si pretendiéramos hacer un código que fuera perfecto, resultaría que aquel que lo fuera para el señor diputado por la capital sería para mí el más imperfecto de todos, del mismo modo que este código que discutimos, que es para mí de una perfección relativa, le ha parecido á él monstruoso. Esa perfección absoluta, al alcance de todos, no será posible obtenerla jamás!

Esta es la perfección relativa, la de este código, que no es una constitución que no puede ser modificada sino por medio de una convención: es un código que puede modificarse ó derogarse por una nueva ley. Y como en todo caso, si algo puede señalar los defectos de las obras de esta naturaleza, no ha de ser la teoría ni el cálculo abstracto, ideal, que nosotros podremos hacer leyendo sus disposiciones, sino la práctica: aquí estará el congreso argentino dispuesto á hacer las enmiendas que la experiencia aconseje!

He concluido.

Varios señores diputados—¡Muy bien! ¡Muy bien!

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Deseo, antes de que haga uso de la palabra el señor diputado, recordarle que lo que está en discusión es una moción de aplazamiento.

El señor diputado no hizo preceder su extensa exposición de ayer de dicha moción, sino que la formuló al final de aquella; de manera que he estado en el caso de permitir al señor diputado por Mendoza que contestara con igual amplitud.

Pero como el reglamento manda que las mociones de esta naturaleza sean discutidas brevemente, pudiendo hacer uso nuevamente de la palabra el autor

de la indicación, quería hacerlo presente al señor diputado, al solo objeto de no estender este debate mas de lo que permite el reglamento.

Sr. Barroetaveña—¿Qué tiempo me concede el señor presidente?

Sr. Presidente—Dejo al criterio del señor diputado la apreciación del alcance del reglamento, en este caso.

Sr. Barroetaveña—El señor diputado por Mendoza empezó su réplica á la exposición que presenté á la honorable cámara, afirmando que el presidente de la República, no obstante lo prescrito por el artículo 95 de la constitución, tiene facultad para rever en los procesos militares, y sacaba esta conclusión de la índole y de las necesidades del ejército como cuerpo organizado, imprescindible para toda sociedad bien constituida.

Prescindo de la procedencia de estos argumentos y de que sea indispensable que el presidente de la República pueda rever las sentencias de los consejos de guerra. Pero decía al mismo tiempo el señor diputado, que esa prohibición constitucional se refería al orden civil no al orden militar, puesto que respecto del ejército tiene el presidente las facultades de comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra, y que era de todo punto improcedente querer aplicar á éste dicha prohibición.

Sería más ó menos aceptable este argumento, si el texto de la constitución no fuera tan categórico y terminante como el artículo 95.

Dice este artículo, señor presidente, que en ningún caso el jefe del estado puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes ó restablecer las fenecidas. Y si dice «en ningún caso», está excluido «algún caso» en que pueda ejercer funciones judiciales. Rever una sentencia de un consejo de guerra, es ejercer funciones judiciales, como el mismo señor diputado lo ha reconocido: es así que la constitución manda que «en ningún caso» ejerza el presidente de la República funciones judiciales; luego, es inconstitucional la facultad que le confiere el código militar.

Pero, señor presidente: dice el señor

diputado que no podrá haber ejército sino se dá esta facultad al presidente de la República, y que parecía contradictorio que en mi exposición anterior admitiese yo que la tuvieran los jefes de ejército, las jefes de plazas sitiadas y de expediciones militares, y que la negara al comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra, es decir, el jefe de todas ellas.

Pero si el señor diputado por Mendoza hubiera meditado sobre el motivo y la razón constitucional que hubo para establecer esta prohibición, seguramente no habría incurrido en semejante error, porque la constitución federal prohíbe al presidente de la República que en ningún caso ejerza funciones judiciales, á causa de la división de los poderes.

Sr. Alvarez—Pero no se lo prohíbe al comandante en jefe.

Sr. Barroetaveña—Como no hay un presidente de la República separado del comandante en jefe, sino que es una misma persona, al prohibir al presidente de la República el ejercicio de funciones judiciales, le prohíbe al presidente en cuanto es comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra, porque es la misma persona.

La razón constitucional es, pues, mantener separados los dos altos poderes del estado: el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta es la razón fundamental, y la otra conjurar aquellos hábitos de barbarie de nuestro país y de todas las naciones de la tierra cuando los jefes del poder ejecutivo ejercieron facultades de juzgar, aunque mas no fuera que respecto del ejército. Y es juzgar en última instancia, rever las sentencias.

Ahora, el señor diputado decía ¿cómo prohibir al comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra el que ejerza esta facultad que la tiene cualquier jefe de plaza, de guarnición, de fortín?

Precisamente, por lo mismo, porque es comandante de todas las fuerzas de mar y tierra, porque reconcentra en sus manos tal cúmulo de poder, que darle todavía esas facultades, habría sido concederle poderes exorbitantes, convertirlo en un déspota.

El señor diputado, en medio de las

palabras benévolas con que ha juzgado mi exposición, me presentaba como defensor de un proyecto de código ideal y aun con su doble fondo de revolucionarismo; y adujo el siguiente argumento: de que en ningún país de la tierra el jefe de la nación estaba destituido de esta facultad de reyer los procesos militares de los consejos de guerra.

Estudiando la organización de los tribunales militares en las principales naciones, encuentro que en todas ellas los procesos del fuero militar terminan en cortes de apelación, y que las causas solamente van á los jefes de las naciones, á los efectos á que deben ir en nuestro país, por la constitución: para que conmuten la pena ó para que la cumplan.

De manera que ese argumento cae por su base. En todas las naciones de Europa, sus jefes no reyen los procesos militares, los reyen las cortes de revisión que hay establecidas, en calidad de permanentes en casi todas partes, porque aun en aquellos países en que existen consejos de guerra formados en los casos de delitos, las cortes de apelación son permanentes; en muchos de ellos las cortes de revisión son tribunales ordinarios permanentes.

Queda, pues, demostrado por esta breve réplica, que el código al conferir al presidente de la República facultades judiciales, ha violado el artículo 95 de la constitución.

Respecto del fuero militar, el señor diputado dijo que yo había incurrido en una contradicción, en una confusión: que el fuero militar era un favor que acordaban las leyes á todos los miembros del ejército para ser juzgados por su tribunal, y que nacieron estos fueros, en una época en que el derecho penal aplicaba castigos severos, casi bárbaros á la clase civil; y que los jefes de las naciones, para captarse las simpatías del ejército, le habían acordado fueros, facultad especial para que sus miembros fuesen juzgados por tribunales que nacieran de su seno, y con penas mas benignas.

Pero si ese fué el fundamento para establecer los fueros, la cámara convenirá que su reinstalación por el código que discutimos, no condice con las penas

que él mismo establece, pues son ellas más severas que las del derecho común.

Cualquiera que sea la inteligencia de los fueros militares, la verdad es que nuestra constitución los derogó categórica y definitivamente por su artículo 16, en cuanto eran personales; estando ya, semi-abolidos por la ley de la provincia de Buenos Aires del año 23; y el señor diputado por Mendoza, decía, que tanto esta ley como la constitución se habían referido nada más que á facultades ó privilegios á favor de las personas, pero no al fuero mismo, que atrae á los tribunales militares á todos los miembros del ejército, por delitos ordinarios.

Este es un error.

Presenté á la honorable cámara ayer, este caso, que es típico: cuando dentro de un cuartel, de una plaza sitiada ó de guerra, ó de un fortín ó próximo á un cuerpo de expedición, se cometa un delito ordinario, un delito común, en el que estén complicados ciudadanos y militares: los ciudadanos serán juzgados por los jueces civiles, y los militares, según el proyecto, por el consejo de guerra.

¿Por qué?

¿Por razón de la materia?

No, porque es materia del fuero común.

¿Por razón del lugar en que se cometió el hecho?

Tampoco, porque el lugar no da jurisdicción sino cuando la nación ejerce ella, exclusivamente jurisdicción en un territorio; y entonces, no es precisamente la jurisdicción del tribunal militar la que corresponde, sino la civil ó la militar en caso excepcional, y no por razón del recinto, no por razón del lugar, sino de la materia.

El señor diputado por Mendoza citaba á este respecto las palabras del doctor Gorostiaga en la convención constituyente de Santa Fe, y de esas palabras, resulta que, replicando á otro convencional que se quejaba de la abolición del fuero eclesiástico, espuso que no se abolía el fuero de causa sino los fueros personales.

Peró, ¿cuál es el fuero de causa en materia de delincuencia militar? ¿Cuáles son los delitos exclusivamente militares?

Son aquellos que solo pueden ser cometidos por militares; esa es la causa, esa es la materia, ese es el fuero de causa constitucional que dá competencia á los tribunales militares.

Pero los delitos comunes que cometen los militares, no dan fuero; esos no extienden la jurisdicción de los tribunales militares hasta su conocimiento, porque no responden al fuero de causa; responderían al fuero personal, si no estuviese abolido por la constitución.

Por el solo hecho de ser militar el deliciente, no atrae el conocimiento de la causa á los tribunales militares.

Eso es lo que ha abolido la constitución, eso es lo que explica el señor Gorostiaga, en las palabras citadas; y ese pasaje de la constitución, como el que prohíbe al presidente de la República que en ningún caso ejerza funciones judiciales, como el que ordena que ningún habitante de la República sea juzgado por comisiones especiales ó sacado de los jueces designados por la ley con anterioridad al hecho del proceso, todos estos preceptos fundamentales de la constitución han sido tomados del proyecto del doctor Alberdi, algunos de ellos al pie de la letra, y otros en sustancia.

El señor diputado por Mendoza presentó á la cámara una serie de casos, recordando lo que significan en nuestro país, estas comisiones *ad hoc* para fallar *ex post facto*, y citaba palabras elocuentes del historiador López; pero todas estas citas no concurrían sino á demostrar la doctrina que estoy sosteniendo: que los tribunales formados *ad hoc*, de listas *ad hoc*, para fallar después del hecho de la causa, son las comisiones especiales condenadas por la constitución.

El señor diputado citaba el caso del fusilamiento de Liniers y otros que tuvieron lugar en Mendoza, y que podía generalizar á las demás provincias.

Es que ese era el estado de arbitrariedad judicial en que vivíamos cuando se sancionó la constitución, que vino á concluir, como dice Alberdi en la nota al artículo, con las penas y prácticas horrosas de nuestras guerras civiles.

En la nota al gobierno con que se acompaña este proyecto de código hay un

párrafo donde se dice que no tiene necesidad de apelar á una doctrina que coloque al ejército fuera de la constitución; pero, en el hecho, de las disposiciones criticadas, de la exposición franca del señor diputado por Mendoza, de su doctrina, resulta que se quiere organizar un ejército fuera de la constitución; pues por estas interpretaciones artificiosas, con que se busca violar la constitución en la forma que se presente mas espeditiva, se llega, precisamente, á atacar principios fundamentales de la misma.

El autor del proyecto de constitución, el doctor Alberdi, trae, respecto de sus posibles violaciones, frases lapidarias, condenando el sistema de pervertir las constituciones por leyes orgánicas, que se valen de medios más ó menos hábiles.

El capítulo se denomina: «La constitución debe garantirse contra leyes orgánicas que pretendan destruirla por excepciones.»

Dice Alberdi: «No basta que la constitución contenga todas las libertades y garantías conocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que, con pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias. Se puede concebir una constitución que abrace en su sanción todas las libertades imaginables; pero que, admitiéndola posibilidad de limitarlas por la ley, sujiera ella misma el medio *honesto y legal* de faltar á todo lo que promete.»

Y agrega: «Un dechado de esta táctica de fascinación y mistificación política, es la constitución boliviana del tiempo del general Belzu.—1851.»

Critica aquella constitución, porque, á pesar de un preámbulo brillante de declaraciones, derechos y garantías, mas notable que el que contiene la constitución de Massachussets, excelente modelo, hace una declaración en cuya virtud todos esos derechos y garantías serán ejercidos con arreglo á las leyes que los reglamenten y modifiquen. Y Alberdi analiza todas las leyes orgánicas que modificaron una á una

las libertades de la constitución de Bolivia, quedando reducidas á lo que expresa el mismo publicista, cuando dice: «Según esto, en Bolivia, la constitución rige *con permiso* de las leyes. En otras partes la constitución hace vivir á las leyes; allí las leyes hacen vivir á la constitución. Las leyes son la regla, la constitución es la excepción.»

«Una constitucion semejante es como un prestidijitador de teatro que os ofrece la libertad; la tomaís; creéis tenerla en vuestra faltriquera; metéis las manos para usarla y halláis *cadena* en lugar de libertad. Las leyes orgánicas son los *cubiletos* que sirven de *instrumento* para esa *mistificación* de gobierno constitucional.—La constitución argentina *debe huir* de ese *escollo*. Como todas las constituciones de los Estados Unidos, es decir, como todas las constituciones *leales y prudentes*, ella *debe declarar* que el congreso *no dará ley*, que *limite ó falsee* las *garantías de progreso* y de *derecho público*, con ocasión de organizar ó reglamentar su ejercicio. Ese deber de *política fundamental*, es de *trascendencia decisiva para la vida de la constitución*».

He ahí las palabras terminantes del ilustre constitucionalista.

De manera que una de las disposiciones de los códigos va á terjiversar el texto claro y categórico de la constitución, que priva al presidente de la República de facultades judiciales, otra, restablece el fuero militar, abolido por la misma constitución; una tercera extiende la jurisdicción de los consejos de guerra á los militares que cometan delitos comunes, valiéndose de interpretaciones artificiosas como las de la nota en que se informa sobre los códigos. Examinemos estos argumentos, un tanto raros: la cláusula constitucional que prohíbe el procesamiento por comisiones especiales, nombradas *ex post facto*, es exclusiva de nuestra constitución; no está en la constitución de Inglaterra, ni en la de los Estados Unidos; luego debemos establecer comisiones especiales para que fallen *ex post facto*. La conclusión lógica debiera ser la contraria!

Véamos este otro argumento concluyente: en Francia funcionan admirable-

mente los consejos de guerra permanentes; en la República Oriental funcionan lo mismo, bajo una legislación tomada de los proyectos de códigos argentinos del año 82; pero como funcionan tan bien en esos dos países, en uno porque tiene mucha población, y en el otro porque tiene poca, no deben servir de modelo á la República Argentina. Debemos ir á tomar como modelo las comisiones *ex post facto* de Inglaterra y de los Estados Unidos, en donde ningún texto de la constitución las condena; debemos abstenernos de respetar la nuestra, con la severidad recomendada por Alberdi; y no debemos ajustar todas las leyes militares á los salvadores preceptos de la constitución.

El señor diputado por Mendoza decía, que si se aceptaran los tribunales permanentes, vendría tal caos, desorganización é indisciplina al ejército, que probablemente lo llevaría á la disolución, y expondría la República Argentina á peligros internacionales.

Pero me parece que el señor diputado ha extremado su argumentación, porque él bien sabe, puesto que es un militar y un jurisconsulto ilustrado, que los consejos de guerra permanentes existen en más de la mitad de las naciones civilizadas de Europa; y ni Portugal, ni la Italia ni la Alemania, ni el Austria, ni tampoco varias naciones de América, han sufrido estos peligros alarmantes.

Como él ha dicho que el código que yo deseo para el ejército argentino es un código ideal, de imposible practicabilidad en los momentos actuales, y como después ha deslizado cierta crítica sobre la competencia del congreso para pronunciarse sobre estas materias, yo tengo que invocar el testimonio de hombres de guerra é ilustraciones notorias, sobre la organización de los tribunales permanentes, y sobre la disyunción que se quiere establecer para los delitos comunes.

Así el señor diputado encontró un medio muy expeditivo para desentenderse de aquel trabajo notabilísimo de nuestro país, donde se sostienen las ideas que he presentado á la honorable cámara. Dijo que era producido por necesidades de la defensa, y que no podían tomarse como

fundamento científico los alegatos forenses hechos con tal objeto.

Desde luego, no se puede admitir esa estrategia parlamentaria, porque si bien las defensas difíciles exigen esforzar la argumentación en cierto sentido, nunca permiten, que se produzcan trabajos tan notables y tan brillantes, tan encuadrados dentro de nuestra legislación, de la ciencia del derecho, con el aplauso de todos, mistificando la opinión pública, alterando los textos y fundamentos de la jurisprudencia para una defensa personal. Y por ello, yo necesito exaltar la autoridad de los jurisconsultos que he citado.

El doctor José María Moreno no era un demogogo, tampoco extraño al conocimiento del derecho, ni menos un ciudadano exclusivamente civil.

Sr. Alvarez—Yo no he dicho eso.

Sr. Barroetaveña—...Era sarjento mayor de línea; había sido ministro de la guerra durante la presidencia del general Mitre, haciendo frente á la guerra extranjera y á una formidable insurrección doméstica, y también había servido en las fronteras.

El general Mansilla, que propone y sostiene los consejos de guerra permanentes, es un militar que ha estado en guerras internacionales y también en servicio de nuestras fronteras. Es un militar tan conservador, que, creó, no ha hecho jamás ninguna revolución.

Los demás generales que firman ese informe, nunca han sido revolucionarios.

Los doctores Alcorta y Obarrio, que sostienen tribunales permanentes, tampoco han sido nunca revolucionarios.

Y cómo no se ha de asombrar la honorable cámara, cuando afirme que los dos Napoleones han sostenido que la jurisdicción civil es perfectamente idónea para juzgar á los militares que cometen delitos del fuero común, sin mengua de la disciplina y del poder bélico de las naciones?

¿Puede creerse que fomentaban la revolución, puede creerse que llevaban la anarquía y la debilitación á los ejércitos en que apoyaban sus gobiernos y con los que dominaban á la Europa? ¿Y si le citara al señor diputado, con el

laconismo con que tengo que expresarme, á Chaveaux, á Blackstone, á Montesquieu, que patrocinan los mismos principios, también los haría á un lado por ser teorizadores revolucionarios?

El señor diputado desea una disciplina severa para el ejército argentino; desea que este sea una máquina de acero; que los ciudadanos se desnuden del civismo cuando vistan el traje galoneado, y que obedezcan como autómatas las órdenes del superior.

Pero, señor presidente, me parece que la necesidad de la defensa de estos códigos inconstitucionales, ha obligado al señor diputado á extremar sus argumentos.

Está bien: el ejército debe sujetarse á la disciplina, el ejército debe obedecer las órdenes de sus superiores, el ejército debe responder á los altos fines constitucionales; pero el ejército no debe convertirse, como los de Artajerjes, en un hato de esclavos que se maneja á latigazos. Los ejércitos modernos son ejércitos de ciudadanos. Lo dice el mismo Napoleon I, y el III: todos somos ciudadanos y debemos respetar los tribunales comunes, como los militares; y tan segura está la disciplina de los ejércitos entregando á la jurisdicción civil los militares reos de delitos comunes, como entregándolos á los consejos de guerra.

Entonces, pues, hay que dejar de lado este argumento de que con las ideas que sostengo se va á llegar á la disolución del ejército. Ni los ejércitos de las naciones europeas que he citado se han disuelto, ni menos el de Inglaterra, donde se han practicado las mismas doctrinas en cierta época, con excelentes resultados.

El doctor Alvarez ha ponderado la superioridad de estos códigos respecto de las ordenanzas y leyes españolas que nos rigen en la actualidad. No he podido hacer un estudio completo de la legislación española antigua sobre esta materia, porque exige mucho tiempo; pero puedo afirmar á la cámara que estos códigos, á pesar de la autoridad científica de los hombres que figuran en la comisión que los ha redactado,

á pesar de la ilustración del señor diputado por Mendoza, en cierto orden de ideas, son mas atrasados que las leyes españolas, que las ordenanzas que nos rigen.

Me bastará recordar esto: las ordenanzas españolas no atribuyen á los consejos de guerra, en ninguna de sus disposiciones, el procesamiento de los militares que tomen parte en alzamientos revolucionarios. Pues bien: los códigos que discutimos dan jurisdicción á los consejos de guerra sobre los militares revolucionarios.

Revisando las ordenanzas, se llega al capítulo de la organización y competencia de los consejos de guerra de oficiales generales, y no se encuentra, en ninguno de los nueve artículos que contiene, ni aun implícitamente, la facultad de condenar por alzamientos revolucionarios; y con posterioridad á estas ordenanzas, los monarcas españoles dictaron dos disposiciones más, ordenando que en ningún caso los consejos de guerra juzgaran á los militares rebeldes, pues los que cometieran alzamientos en armas, ó revoluciones, deberían someterse á la justicia ordinaria.

De manera que, á este respecto, llevando á los militares revolucionarios ante los consejos de guerra, el código conspira contra las mismas ordenanzas, y llega, en el olvido de las prescripciones constitucionales á este respecto, á establecer la pena de muerte para un caso de rebelión, cuando la constitución nacional prohíbe *para siempre* (son sus palabras) la pena de muerte por causas políticas.

Sr. Alvarez—¿En qué casos de rebelión?

Sr. Barroetaveña—En el caso de rebelión cuando la República esté en guerra extranjera. Para ese caso, el proyecto de código manda que se aplique la pena de muerte.

Sr. Alvarez—Considerándolo como traición.

Sr. Barroetaveña—No lo dice, porque la traición está legislada en otra parte. Es como rebelión.

Sr. Alvarez—Yo se lo digo.

Sr. Barroetaveña—De manera que, según este artículo, en la revolución á

Napoleón III, que hicieron Gambetta y jefes notables del ejército francés, habrían sido llevados al patíbulo, porque hicieron la revolución en presencia del enemigo!

Sr. Alvarez—El código lo llama traición, contra la nación, no contra el presidente de la República.

No sería ese, pues, el caso.

Sr. Barroetaveña—Pero estas palabras tienen significado distinto; cuando la ley habla de rebelión, excluye la idea de traición, mucho más cuando legisla en capítulo aparte.

Y á propósito del delito de traición que me recuerda el señor diputado, debo hacer presente á la cámara que en uno de los artículos del código penal militar se califica de traición el hecho de propagar ideas que hagan daño—habla así en una fórmula vaga,—que hagan daño á la organización del ejército y de la defensa; y agrega que la propaganda que tenga esos efectos es un delito de traición; cuando la constitución dice terminantemente que la traición á la patria consiste tan solo en aliarse al enemigo, cuyos casos los ha reglamentado la ley de 1863.

El señor diputado por Mendoza, presentando las ideas que expuse á la cámara como peligrosas para la organización de un código militar, llegó á decir que el país iría á la anarquía, á la guerra civil, que esto favorecería los alzamientos revolucionarios de los militares, y dedujo de ahí, muchas consecuencias.

Creo que uno de los hombres que han deseado más la paz, pero la paz constitucional en nuestro país, ha sido el eminente Alberdi; y este sábio, que desea la paz sobre todo, trae al respecto estas profundas palabras: «La paz es la necesidad que domina todas las necesidades públicas de la América del Sud; ella no necesitaría sino de la paz para hacer grandes progresos. Pero no lo olvidéis: la paz solo viene por el camino de la ley. La constitución es el remedio más poderoso de pacificación y de orden; la dictadura es una provocación perpétua á la pelea, es un sarcasmo, un insulto sangriento á los que obedecen sin reserva; la dictadura es la anarquía constituida y convertida en institución permanente.

Chile debe la paz á su constitución; y no hay paz durable en el mundo que no repose en un pacto expreso y conciliatorio de los intereses públicos y privados.»

He ahí la paz que deseo para la República Argentina; he ahí la legislación que deseo para el ejército; que todos conozcan sus deberes y sus derechos; que obedezcan los primeros y ejerciten los segundos; que sean tan bravos guerreros como buenos ciudadanos; que cumplan la disciplina y defiendan la constitución.

Pero el señor diputado ha querido excomulgar á todos los militares que tomen parte en revoluciones.

En tal caso tendrá que execrar á todos los grandes guerreros de la América; tendrá que presentar, no diré como traidores á la patria, pero sí como reos de lesa magestad y de lesa disciplina, á nuestros militares mas conspicuos y preclaros.

Sr. Alvarez—Cuando una revolución es nacional y todo el país la desea, esos individuos no necesitan que nadie los absuelva; los absuelve todo el mundo, por la causa en virtud de la cual se han alzado.

Sr. Barroetaveña—¿En este caso admite la revolución, y en los otros no!

Sr. Alvarez—Es decir, solo las chirinadas son las que yo resisto.

Sr. Barroetaveña—¿Pero quien clasifica la chirinada?

El gobierno tendría que decir de antemano: esto va á ser ó no una chirinada, para según eso mandar ó no al cadital! ...

Sr. Alvarez—La opinión pública es la que clasifica.

Sr. Barroetaveña—Señor presidente: este argumento debe descartarse del debate.

Yo no me he propuesto—lo declaro con toda lealtad—favorecer revoluciones de ningún género; me he propuesto hacer la crítica de una ley que la creo repugnante á nuestra constitución.

No traigamos, pues, este recuerdo de las revoluciones.

Las revoluciones son grandes acontecimientos políticos producidos por causas profundas, que tienen hondas raíces en el seno de las sociedades; y cuan-

do se presentan con los contornos de la popularidad—el mismo señor diputado lo reconoce—los militares como los civiles tienen el mismo derecho para defender la patria y sus instituciones.

Es cuestión de apreciar la justicia que acompaña á cada movimiento revolucionario.

Creo que puedo afirmar dogmáticamente: todos los argentinos serán revolucionarios en casos dados; ninguno puede decir: yo no seré jamás revolucionario, porque tendría que renegar de la forma de gobierno, de nuestra gloria histórica y de los derechos que consagra la constitución.

El señor diputado presenta como un argumento de efecto, el que no podrá instalarse ó constituirse en nuestro país los consejos de guerra permanentes por la falta de personal habil en el ejército para componerlos.

En el proyecto que fué remitido el año 81 por el presidente Roca, cuando había, creo, ménos de la mitad de jefes y oficiales en nuestro país, se aconsejaba la organización de tribunales permanentes; y, desde luego, llama mi atención cómo el general Roca, militar tan previsor, ha podido proyectar para la República Argentina un sistema de consejo de guerra sin elementos con que componerlos. Y me ha llamado más la atención cuando he visto que en el proyecto de código militar redactado por el general Mansilla en 1876, por encargo del doctor Avellaneda, también se establecen los tribunales de guerra permanentes.

Desde luego hay que sacar esta conclusión: Si ahora quince ó veinte años había elementos con que formar los consejos de guerra permanentes, hoy que existen muchos más jefes y oficiales que entoces, mientras que el ejército ha variado poco, debe haber mayor facilidad para formar estos consejos.

Recorriendo el presupuesto, he sacado los siguientes datos: que hay 1737 jefes y oficiales que pueden formar los consejos de guerra permanentes, de los cuales 1285 prestan servicios en los cuerpos y en comisión, quedando sin colocación 477 jefes superiores entre, generales, coroneles, comandantes y mayores.

De manera que si en alguna na-

ción hay jefes y oficiales en número excesivo para formar, no digo cuatro ó cinco consejos de guerra, sino todos los que se considerára necesarios, es precisamente en la República Argentina.

Hay una cantidad numerosa de jefes y oficiales del ejército, que no hacen otra cosa que percibir el sueldo y pasear, porque no tienen ocupación.

Sr. Alvarez—Le rogaría que leyera el mensaje con que el poder ejecutivo remitió el proyecto al congreso en 1881, y verá que el entonces presidente, general Roca, y su ministro, dicen que no habían podido leer detenidamente el proyecto de código, y que lo remitían en la forma que lo había confeccionado la comisión especial.

Sr. Barroetaveña—Pero es inaceptable que el presidente de la República y el ministro del ramo pidieran al congreso la aprobación de códigos inútiles, que ni siquiera hubieran leído.

Debe creerse que esa observación que hacían en el mensaje, se refería á otros puntos de detalle del proyecto; pero no á la cuestión capital, sobre la organización de los tribunales militares.

Sin embargo, se dice: no tenemos divisiones territoriales para nuestro ejército, y es difícil establecer aquí el tribunal permanente.

Todo es cuestión de reglamentación, señor presidente.

Pregunté á un jefe del ejército, miembro de la comisión de guerra, cuántos consejos de guerra se formaban por año, y su contestación—aunque dudaba algo de sus recuerdos—fué que apenas se formaban quince ó veinte por año.

Y yo digó entonces: ¿no hay cómo formar un tribunal para fallar quince ó veinte causas?

¿Y si se establecieran dos ó tres consejos de guerra, uno para la capital y los demás para el resto de la República, dividida en secciones, una del norte y otra del sud?

Sr. Alvarez—¿Y para los ejércitos en campaña?

Sr. Barroetaveña—Para los ejércitos en campaña servirían los mismos consejos, se nombrarían otros, ó bien en caso de guerra ó expediciones militares, correspondería que una ley especial dis-

pusiera la organización de los consejos necesarios que acompañaran á cada ejército.

Sr. Alvarez—Cada columna expedicionaria tendría que llevar uno.

Sr. Barroetaveña—Por otra parte, en Europa algunas naciones que tienen tribunales permanentes, carecen de divisiones territoriales.

Como se establecen jueces de instrucción y comisarios de policía para levantar el sumario, no sería imprescindible que los consejos permanentes se trasladaran á todos los puntos de la República.

De todas maneras, señor presidente, sostengo que hay un número suficiente de militares para formar todos los consejos de guerra que se precisen.

Por otra parte, en nuestro ejército hay poca delincuencia.

El señor diputado por Mendoza ha incurrido en una confusión en lo relativo á la estabilidad de los consejos: ha dicho que yo he sostenido la necesidad de consejos de guerra permanentes é inamovibles.

No me ha comprendido, ó no me he explicado con suficiente claridad.

No he sostenido que los consejos de guerra sean inamovibles.

Me doy cuenta de las necesidades del servicio público, que pueden reclamar la traslación de militares distinguidos; y aun cuando este derecho de mandarlos á cualquier parte, de que no se debe privar al poder ejecutivo, perturbase la organización de los consejos de guerra, puede salvarse de peligrosos abusos, tomando algunas precauciones para el nombramiento de los miembros de los consejos de guerra permanentes, como podría ser el consentimiento del senado.

El señor diputado criticaba los proyectos del 82, diciendo que no podía aceptarlos la comisión ahora, porque establecían que el fiscal, parece, fuera un hombre civil.

Sr. Alvarez—El fiscal del juzgado de sección.

Sr. Barroetaveña—Sobre esta materia el señor diputado ha elogiado mucho y tomado como modelo á la Inglaterra,

Debo hacer presente á la cámara, que en Inglaterra, segun esponen Blackstone

y Fischer, los instructores de los consejos de guerra son jurisconsultos; y un eminente autor de derecho militar opina que convendría que todo sumario militar fuese hecho ó revisado por un jurisconsulto, y que en cada consejo de guerra debiera haber un letrado.

Yo no comprendo cómo el señor diputado sostiene que no deben formar parte de la administración de justicia militar los jurisconsultos.

Sr. Alvarez—Ponemos algunos en el consejo supremo.

Lo que yo he dicho es que no se puede admitir que vayan á defender la disciplina, porque no la pueden conocer.

Sr. Barroetaveña—Si hay hombres idóneos, capaces para administrar justicia, son precisamente los que han estudiado el derecho, los jurisconsultos.

Sr. Alvarez—Para el derecho común.

Sr. Barroetaveña—La misma comisión, cuyo informe notable ha elogiado el señor diputado por Mendoza, concluye su exposición con esta frase, a propósito de los reos militares en caso de complicidad de delitos políticos. «Si los tribunales militares son tribunales de excepción, las garantías no deben ser ilusorias, tanto más cuanto que ellas no se han establecido á favor de unos exclusivamente, sino para todos los que habitan el suelo de la República. El militar, por ser tal, no pierde su carácter de ciudadano, y si las exigencias de su misión lo sacan en una parte de la influencia del derecho común, no puede convertirlo en un pária, para quien la ley común y el organismo del estado es algo que no le alcanza. La constitución está sobre todas las leyes, y los militares no escapan de su acción benéfica mientras el territorio enemigo no se ha hecho campo de sus operaciones.»

El señor diputado, citando á Withing dijo que, en ciertos casos, debe prescindirse de la constitución para el juzgamiento de los miembros del ejército, agregando que había sido auditor de guerra en tiempo de Lincoln, á quien se tributan elogios como respetuoso de la constitución.

Y bien; Lincoln y Washington coinciden en este pensamiento: que la consti-

tución debe tener su imperio en la época de guerra como en la de paz; y que los principios fundamentales que consagra deben amparar tanto al ejército como á los ciudadanos.

En nuestro país las declaraciones de la constitución se refieren á todos los argentinos, á todos los habitantes del suelo de la República. Y sería original que precisamente al ejército, encargado de cuidar la integridad del territorio y el imperio de la constitución, ésta lo hubiera privado de sus garantías, de todos los beneficios que ella misma acuerda al país, y convirtiéndolo en una clase tiranizada por leyes oscuras y draconianas.

Esto, aparte de ser injusto, envolvería un gran peligro para el futuro de la República, porque ese ejército, que se considerase como un pária, concluiría por volver sus armas contra la misma sociedad injusta y opresora.

El señor diputado ha dicho que no tuvo razón al criticar la formación de las listas de que deben sortearse los miembros del consejo de guerra, porque esas listas debían formarse de antemano.

Sr. Alvarez—No; porque existían de antemano los jurados, que deben ser incluidos obligatoriamente en las listas.

Sr. Barroetaveña—Si ese es el pensamiento del señor diputado, no ha sido feliz la comisión redactora al escribir el artículo 13 del código, porque allí no se dice sino esto: «El presidente de la República y, en su caso, las personas designadas en el inciso 4º del artículo 1º, nombrarán el presidente del consejo, quien deberá sortear oportunamente los vocales de entre una lista de oficiales hábiles que pedirá, por el conducto correspondiente, á los jefes de estado mayor.»

De manera que si el pensamiento es formar de antemano listas del escalafón, de donde deben ser sorteados los miembros del consejo de guerra, debe decirlo en la ley, pues como está redactado, autoriza las listas arbitrarias *ad hoc*, para fallar *ex post facto*.

Sr. Alvarez—No, señor: lo que yo sostengo es que los jurados existen como tales antes del hecho; la lista es lo que se forma después.

Sr. Barroetaveña—Ahí está el peligro.

porque esa es la comisión especial condenada por la constitución.

El señor diputado ha traído á colación un proyecto de ley que sometió á la consideración de la honorable cámara, sobre la jurisdicción de los tribunales federales en los delitos políticos, y ha creído que podía yo tener el propósito que él entreveía en mi proyecto, de hacer una ley *ex post facto*, para favorecer á reos ya condenados.

Pero me estraña que el señor diputado, que á su calidad de militar une la de juriconsulto, olvide el principio tan conocido del derecho penal: que toda ley favorable al reo tiene efecto retroactivo.

Tan incontrovertible es esto, que en el mismo código que discutimos se establece, al hablar de la amnistía, que las leyes que se dicten favorecerán hasta á los condenados.

De modo que si es esto....

Sr. Alvarez—Yo dije, efectivamente, que estas leyes penales, cuando son favorables, se aplican retroactivamente.

Pero es que el proyecto del señor diputado incluye los casos ya juzgados, y eso es lo que se llama leyes *ex post facto*.

Sr. Barroetaveña—Yo le repito al señor diputado que lo que sostengo no solo es constitucional, sino que está en armonía con los principios universales del derecho penal.

Sr. Alvarez—¿Después de falladas las causas?

Sr. Barroetaveña—Después de falladas; y lo dice el mismo proyecto que se discute, el mismo código que ha firmado el señor diputado.

Sr. Alvarez—Esa es otra cosa. Las leyes de indulto son para eso.

Sr. Barroetaveña—Repito que el jurado civil no puede nunca compararse con estos consejos de guerra cuya organización propone la comisión.

El jurado, como lo dije ayer, se forma de una lista numerosísima de ciudadanos. Esa es una manera habil de procesar para el estado civil, en tiempo de paz, en el orden regular de la sociedad; y aún cuando se sorteara de esa lista numerosa en que entran representantes de todos los gremios sociales, la re-

presentación es genuinamente popular, es el pueblo mismo juzgando.

¿Cómo comparar, pues, este jurado con el sorteo de una lista formada *ad hoc* por el presidente de la República, para que falle en una causa, después de haberse producido el hecho delictuoso?

Si puede decirse que el jurado es el pueblo mismo administrando justicia, esta manera de formar consejos de guerra representa la quinta esencia del funcionarismo, del funcionarismo mas subordinado, que depende por su disciplina, por su empleo, por los castigos severos, directamente, del presidente de la República!

Creo haber refutado la exposición del señor diputado por Mendoza, y demostrado á la cámara que los consejos de guerra permanentes son factibles; que con ellos se evita la violación de la carta fundamental que contiene este proyecto; que ellos servirán de escuela á los militares, y los harán peritos en el derecho que los rige y en la administración de justicia.

Espero que si vuelve este proyecto á comisión para atender las observaciones presentadas, se salven los demás escollos de orden constitucional, como conferir al jefe del estado facultades judiciales que prohíbe la constitución; la necesidad, en fin, de suprimir de éste código voluminoso la nueva y severa penalidad que contiene para los delitos del fuero común.

Y á este respecto deseo referirme una vez más á Napoleón I y á Napoleón III. Al reclamar el fuero militar, fuero que existe en Europa como una necesidad para mantener organizados vigorosamente los colosales ejércitos permanentes, y que se estableció por ley del año 1857,—manifestaban que debían aplicarse á los militares los mismos castigos del código penal ordinario. Entre tanto, la comisión proyecta una penalidad mucho más severa.

De modo que rechazando esta parte, que viene á restablecer el fuero personal, abolido por la constitución, rechazaremos una série de artículos inútiles, reglamentarios de delitos comunes.

Por estas consideraciones, y no habiéndome sido posible redactar las re-

formas que, á mi juicio, requiere este código, pues ellas son capitales, insisto en mi moción: de que vuelva á comisión, no para postergar su sanción para el año próximo, sino para que dentro de ocho ó diez días, con mayor madurez de juicio, con exámen más prolijo, pueda introducirse en la nueva ley las modificaciones de que es susceptible.

Repito, señor, que tengo la profunda convicción de que el código entraña las inconstitucionalidades que he mencionado á la cámara, y que no me ha movido ningún pensamiento de política transitoria, ni el propósito ulterior de socavar la disciplina del ejército. Deseo que nuestro ejército, que cuenta tantas glorias en los fastos históricos, esté regido por leyes sábias, de acuerdo con la constitución, y en armonía con los principios del derecho militar más adelantado.

Es cuanto tengo que decir.

Sr. Alvarez—Pido la palabra.

Solo para decir que la comisión de guerra difícilmente podrá madurar su juicio hasta donde lo ha hecho el señor diputado.

No quiero insistir en contestar los últimos argumentos del señor diputado, porque no va á ser posible que yo le convenza, ni que él me convenza á mí.

Pero tampoco es necesario. Si tiene razón el señor diputado, y estos códigos son inconstitucionales, tenemos la suprema corte de la nación para que así lo declare. El congreso no corre ningún peligro, ni el ejército tampoco.

Sr. Barroetaveña—Y si en ocho días podemos hacer algo mejor y más constitucional ¿por qué no hacerlo?

Sr. Alvarez—Puede presentar un proyecto el señor diputado.

Sr. Presidente—Se va á votar la moción de orden presentada por el señor diputado por la capital, para que el asunto vuelva á comisión.

—Se vota, y resulta rechazada por 37 votos contra 8.

Sr. Presidente—Ahora se va á votar el artículo 3º del proyecto de la comisión, que fué el que quedó pendiente.

—Se vota dicho artículo, y se aprueba, así como también el artículo 4º.

El 5º es de forma.

Sr. Amuchastegui—Hago moción para que se levante la sesión.

—Apoyado.

—Se vota esta moción y se aprueba, levantándose la sesión á las 4 y 55 p. m.